

La opacidad social.

Ruiz Encina, Carlos y Toro, Eduardo.

Cita:

Ruiz Encina, Carlos y Toro, Eduardo (2006). *La opacidad social. Análisis del Año, (8), 41-63.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/httpwww.nodoxi.cl/7>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pfDv/3fF>



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

SOCIEDAD

La opacidad social

CARLOS RUIZ Y EDUARDO TORO

Cualquiera sea la óptica con que se mire, hoy la sociedad aparece menos legible, como algo más difícil de descifrar. Sucesivos cambios de distinta hondura, ocurridos en disímiles ámbitos –económicos, políticos, culturales– durante las últimas décadas, hacen de la sociedad chilena actual algo en cierta medida ilegible, sobre todo si se considera que muchos de esos procesos de cambio se encuentran todavía en pleno desarrollo.

Dar cuenta de las dinámicas sociales actuales para un recuento anual, sistematizándolas a la vez que reflexionando acerca de su carácter y sus alcances, exige en consecuencia abordar algunas consideraciones acerca del problema de “lo social” en la actualidad y la medida en que presenta un panorama distinto al que se conoció tradicionalmente. Durante la historia más reciente el sentimiento de identificación social ha retrocedido. Por un lado, la sociedad chilena ha experimentado una enorme reorganización de los modos de diferenciación y jerarquización sociales. Por otro, puede decirse en cierta forma que la política se “desociologizó” de un modo claro a partir de los años noventa. Por unas y otras razones, esa pérdida de fuerza de las identidades colectivas se ha traducido en una extendida sensación de una mayor opacidad social¹.

A diferencia del desarrollo, la gravitación y la visibilidad de ciertos sujetos e identidades sociales que constituyeron un rasgo marcado y distintivo de gran parte del siglo XX chileno, en el último período los actores y las dinámicas sociales se han tornado prácticamente imperceptibles. Si se piensa más allá de las descripciones

¹ Ocupamos la expresión “opacidad social” en el sentido en que recurre a ella la discusión social francesa reciente, la cual, a pesar de su especificidad, nos parece adecuada para referir ciertos fenómenos propios de la situación chilena. Al respecto pueden verse entre otros Castel, Robert, *La metamorfosis de la cuestión social*, Ed. Paidós, Bs. As., 1997, y Fitoussi, Jean-Paul y Rosanvallon, Pierre, *La nueva era de las desigualdades*, Ed. Manantial, Bs. As., 1997.

puntuales que a ratos aparecen, las más de las veces de naturaleza periodística (aunque se hagan en nombre de las ciencias sociales), se puede decir que en cierta forma lo social se ha vuelto ininteligible. Es más, tal dificultad de percepción de los modos de diferenciación social más relevantes y sus efectos concretos, de las dinámicas sociales y sus actores, pasa a constituirse en sí misma en uno de los rasgos más distintivos de la sociedad chilena contemporánea.

Se dirá que esta situación se debe a las profundas mutaciones que ha experimentado la sociedad chilena en las últimas décadas. Le sigue a eso la idea de que tales cambios han borrado prácticamente toda huella de lo conocido a lo largo de buena parte del siglo pasado. Y tras esa extendida visión se agolpan disímiles caracterizaciones sobre la profundidad y el sentido de los cambios ocurridos; cambios, por lo demás, para muchos aun en curso. Tales transformaciones se aprecian en diversos órdenes: políticos, socioculturales, económicos, cuando no en todos ellos a la vez. Su caracterización, la estimación de su profundidad efectiva y su orientación, está lejos de agotarse. Las apreciaciones divergen en un disperso arco de estimaciones, lo cual tiene que ver además con la diversidad de los anclajes teóricos que subyacen tras tales apreciaciones.

Tal panorama debe ser consignado aquí, aunque sea de un modo general, para enmarcar el registro de las dinámicas sociales más significativas del último tiempo, sus alcances inmediatos y las reflexiones acerca de sus posibles proyecciones. Sin pretender trazar una síntesis crítica y sólo con el objeto expositivo de la discusión que atinge a estas páginas, podemos agrupar en dos gruesas dimensiones las apreciaciones mencionadas. Una es sin duda la que alude al cambio de la sociedad chilena a partir de la transformación económica y socio-estructural, y la medida en que implica la desarticulación de viejos actores e identidades sociales. La otra, comparativamente más reciente, es aquella que llama la atención sobre los cambios de la política y la cultura.

Por cierto que ambas dimensiones no resultan independientes entre sí. Pero ocurre que, debido a una vieja costumbre de evolucionar dando bandazos de un extremo a otro, buena parte del pensamiento social gira en estas décadas desde los viejos determinismos economicistas, de un estructuralismo momificante, hacia un subjetivismo desmesurado que –hoy en boga– llega a desconocer las vinculaciones existentes entre las dimensiones y fenómenos mencionados, conduciendo a una fragmentación artificial y extrema de las percepciones de la realidad social que, al debilitar la originaria perspectiva comprensiva del pensamiento social, reducen la lectura de lo social a registros descriptivos de esferas fragmentadas e inconexas. Las relaciones entre las distintas esferas del desarrollo social se tornan opacas bajo el dictado de modas intelectuales que decretan la imposibilidad de comprender a la sociedad como totalidad. Dimensiones como la política y la economía se naturalizan al dejar de pensarse como procesos sociales producto de esta mutación del

pensamiento². Evidentemente, tal sequía del pensamiento social contribuye con lo suyo a este fenómeno de la opacidad social.

EL OCASO DE LOS VIEJOS ACTORES SOCIALES Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA SOCIAL

Un primer aspecto gravitante en la dificultad de apreciar dinámicas y actores sociales relevantes en la actualidad, tiene que ver con la marea desarticuladora que la transformación histórica de las últimas décadas significa para aquellos sectores, sujetos e identidades sociales que antaño resultaron más relevantes y arquetípicos de la sociedad chilena. A partir de 1973 se distingue tempranamente una primera dimensión coactiva, directamente represiva, que interviene en tal dirección. Se trata principalmente de la desarticulación del viejo movimiento obrero, así como de importantes formas de organización y agrupación de intereses de las franjas más relevantes de las clases medias, como los colegios y las agrupaciones de profesionales o las asociaciones de empleados públicos, bajo las condiciones que inaugura el régimen militar. A las acciones de persecución se suman las de proscripción y expulsión del espacio público que pronto se formalizan institucionalmente, como es el caso del Plan Laboral, que consagra la desarticulación de aquél movimiento obrero ligado a los partidos políticos y claramente inserto en la dinámica institucional. La actividad sindical se restringe a los marcos de cada empresa, clausurando las posibilidades de articulación interempresarial y sectorial, así como sus viejos términos de articulación política. Pero a corto andar, junto a la dimensión coactiva de la desarticulación que padecen los viejos actores sociales, se comienza a distinguir otra, de efectos acaso más perdurables, que pone atención en la transformación de la estructura social que acompaña a los cambios que sufre la estrategia de desarrollo capitalista con el giro neoliberal.

Mucho se ha escrito sobre el desdibujamiento de los viejos actores sociales y las categorías socioeconómicas asociadas a estos, y con ello sobre la desintegración o simplemente la “pérdida de peso” de las identidades sociales a ellos ligadas. Al momento de abordar las mutaciones de la estructura social vinculadas a la transformación neoliberal, se pone un marcado énfasis en los llamados procesos de desestructuración, insistiendo en el socavamiento de las bases estructurales de dos actores sociales principales del período anterior: la clase obrera, a menudo más vinculada a los emprendimientos industrializantes del aparato de Estado que al capital privado, y aquellas fracciones de las clases media también ligadas al empleo estatal,

² En esta cuestión insistía con preocupación Enzo Faletto en una de sus últimas entrevistas, al pasar revista al estado de la sociología y el pensamiento social en Chile hoy. Véase Zerán, Faride, *Enzo Faletto rompe tres décadas de silencio: Necesitamos una nueva ética del comportamiento*, Revista Rocinante, Arte, Cultura y Sociedad, Año V, No.41, Santiago, marzo, 2002.

funcionarias, vinculadas más a una condición salarial que a la pequeña propiedad, ideológicamente progresistas o, puesto en los términos de la vieja jerga, desarrollistas.

Los estudios de Javier Martínez y Eugenio Tironi en los años ochenta, de Arturo León y el mismo Martínez en los noventa o de Guillermo Wormald y Florencia Torche en la década actual, constituyen un hilo expresivo de tal interpretación de la transformación³. Lo que develan principalmente es el proceso mediante el cual la vieja sociedad va quedando atrás, dando paso a un mapa social nuevo, marcado por la heterogeneidad más que por la emergencia de posiciones socio-estructurales capaces de ocupar en forma homogénea el enorme vacío dejado por el debilitamiento de esas viejas categorías.

Se señala una drástica reducción de la vieja clase obrera producto de un proceso de desindustrialización que significa, en forma sucesiva, cursos de desasalarización y reasalarización, durante los cuales la fisonomía del mundo asalariado se trastoca definitivamente bajo el nuevo rostro de la expansión del mundo de los servicios en detrimento de la vieja centralidad de la condición obrera. Tal terciarización de la fuerza laboral, junto a su feminización y a los cambios en las condiciones de asalarización, marcadas ahora por la informalidad y la flexibilidad laboral (salarial, contractual, operacional), configuran un panorama muy distinto al conocido hasta entonces. La extendida privatización de empresas estatales y el desmatelamiento de los enormes servicios públicos montados durante el período anterior, significan la desarticulación de las bases estructurales de existencia de las fracciones política e ideológicamente más influyentes de las clases medias. Su forzada “privatización” las reorienta al ingreso en empresas privadas consolidadas o bien a la aventura del emprendimiento forzoso en el mundo de la mediana y la pequeña empresa.

Esta lectura señala además la reducción del antiguo campesinado y sus movimientos cooperativos bajo la marcha de un proceso de asalarización rural, cobijado bajo la llamada “contrarreforma agraria” y la “modernización del agro”. Destaca una inédita expansión de la marginalidad, de la llamada economía informal, el difuso universo de la microempresa, de la autoexplotación y el trabajo familiar. A estos cambios, tampoco escapa el mundo empresarial, que en este curso de mutaciones deja atrás las formas propias de la égida industrial para adoptar de manera creciente las modalidades que trae consigo la invasiva financiarización de la economía.

³ Véase respectivamente Martínez, Javier y Tironi, Eugenio, *Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1980*, Ed. Sur, Santiago, 1985; León, Arturo y Martínez, Javier, *La estratificación social chilena hacia fines del siglo XX*, en “Chile en los noventa”, C. Toloza y E. Lahera (editores), Ed. Dolmen y Dirección de Estudios de la Presidencia de la República, Santiago, 1998; Wormald, Guillermo y Torche, Florencia, *Estratificación y movilidad social en Chile durante las últimas décadas del siglo XX*, Informe de Investigación, Proyecto FONDECYT sobre Movilidad Social en Chile, No. 1010474, concurso regular 2001, Santiago, 2001. Una versión abreviada de las conclusiones

de esta última investigación se puede encontrar en Wormald, G. y Torche, F., *Estratificación y movilidad social en Chile*, Series de la Cepal, Santiago, 2004, o bien en Atria, Raúl, *Crecimiento y estratificación social: la paradoja del crecimiento y el caso chileno*, Revista CPU, No. 114, semestre 2, Santiago, 2004.

La “jibarización” de dichos sectores sociales no sólo significa la desarticulación de los sujetos ligados a ellos, sino también el desplazamiento de los códigos de interpretación de la sociedad, las mentalidades y el sentido con que se apreciaban ciertas instituciones y procesos sociales. Pues, en base a esas categorías y actores es que se comprendían procesos como la urbanización, la expansión del sistema educativo, la ampliación del acceso a las comunicaciones, la extensión de la ciudadanía política y la participación social. Junto a estos procesos de desarticulación social sucumben también las formas más extendidas de apreciación de la vida colectiva.

Las apreciaciones que siguen en esta lectura iniciada en los años ochenta no consignan cambios relevantes. Más bien resultan un seguimiento de las tendencias consignadas. Producto de la orientación heterogenizante atribuida a la transformación social en curso, los estudios distinguen de modo creciente “capas”, subsectores, “desigualdades interclasistas”, incluso entre “generaciones” dentro del nuevo mapa social chileno. Sucesivamente se registra un fenómeno de pérdida de los grados de colectivización propios de tiempos pasados. Bajo la noción de “inorganicidad” se insiste en el débil grado de colectivización contenido en las redes de relaciones sociales aparejadas con las distintas posiciones socio-ocupacionales, y con eso, en un “bajo grado de posiciones dominantes” en la nueva estructura social, lo que se considera como un poderoso incentivo a la individualización. Se consigna además el mejoramiento más rápido, ya entrados los años noventa, de los ingresos laborales de las categorías de trabajadores independientes en comparación con las posiciones asalariadas, en un contexto en el cual se reconocen como más reducidas las posibilidades de movilidad social efectiva. Junto a la extensión del curso de terciarización de la fuerza de trabajo, concita atención la burocratización del trabajo asalariado bajo la nueva organización privada, una suerte de “burocracia moderna de servicios privados” de fuerte expansión, internamente bastante diferenciada y no reductible a la imagen de las cúpulas tecnocráticas.

Tales rasgos siguen señalándose en la actualidad, ahora ya no como parte de las tensiones y reacomodos drásticos que se produjeron en la estructura social chilena en tiempos del cambio en el modelo de crecimiento económico, sino atribuidos ya a una fase de estabilización de dicha estructura social en una fase avanzada del ciclo. Aparte de una recuperación de la proporción de trabajadores dependientes frente al trabajo por cuenta propia, la pauta sigue siendo la del aumento de la diferenciación al interior de los distintos segmentos sociales en la primera década del nuevo siglo. Una caracterización que alcanza más precisión y nitidez en los extremos de la pirámide social, mientras que en el sector intermedio de la distribución tiende a clasificar a los individuos con criterios más difusos y a menudo superpuestos. Las categorías intermedias aparecen como una zona gris en la comprensión del perfil y la dinámica de la estructura social, lo que reanima la disyuntiva acerca de la extinción de las clases sociales o el surgimiento de otras nuevas. Debido al carácter extremadamente dinámico de los segmentos medios, se aprecia cierta tendencia a la polarización social

en su interior, dada la existencia de categorías que experimentan una movilidad social ascendente mientras que otras, más numerosas, son empujadas en dirección opuesta. Lo cual dirige las preguntas a la efectividad de las dinámicas meritocráticas y de expansión de las oportunidades, y anima desde esta perspectiva y en forma más extendida la inquietud por la equidad.

DESIGUALDAD Y CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA

La desigualdad aparece como un problema que concita creciente atención, tanto en la discusión de las elites políticas y empresariales como en los medios de comunicación. Cuestión que no aguanta términos abstractos. Es que, a lo largo de su historia, Chile ha sido siempre un país desigual. Luego, ¿a qué se debe la preocupación actual por la desigualdad existente en el país? ¿Hay algo que distingue a la desigualdad social actual? ¿Plantea, acaso, problemas distintos a aquellos que históricamente se han conocido? Más allá de sistematizar y discutir distintas estimaciones al respecto⁴, surge la interrogante acerca de sus repercusiones sobre la cohesión social, y los dilemas concomitantes que ello significa para los modos actuales de dominio, así como sus efectos sobre las condiciones de constitución de la acción colectiva y las posibilidades de emergencia de actores sociales protagónicos.

Resulta claro que la preocupación actual por la desigualdad se constituye desde ciertos sectores de la elite política y económica. Inicialmente gravita ahí el cuestionamiento de importantes instituciones internacionales al respecto, como el Banco Mundial y el PNUD⁵. Pero también una inquietud explícita por los grados de cohesión social básicos requeridos por el proyecto de gobernabilidad vigente. Una inquietud –del propio Presidente, algunos dirigentes empresariales y la curia eclesiástica– que no apunta a las dimensiones más extremas y tradicionales de la desigualdad, como son las referidas a las situaciones de pobreza. A diferencia del discurso que prima hasta hace unos años, la preocupación de la pobreza cede lugar a la inquietud por la desigualdad. Con un claro énfasis, apunta hacia aquellos fenómenos que se han distinguido como “nuevas desigualdades”, vinculadas a las desigualdades de oportunidades y las restricciones a la movilidad social, así como con desigualdades culturales ligadas a las crisis identitarias⁶. La desarticulación de viejos patrones de cohesión social se asocia a la mentada “crisis del individuo” producto del vacío que deja, dada su insuficiente sustitución por nuevos paradigmas

⁴ Para una sistematización crítica de diversas estimaciones puede verse en la edición pasada de esta misma revista Ruiz, Carlos, *¿Habrá crecimiento con igualdad hacia el bicentenario?*, Análisis del Año 2004. Política, Sociedad y Economía, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago, 2005.

⁵ Véase al respecto Ruiz, *op. cit.*

⁶ Estas cuestiones han sido señaladas por autores como Fitoussi y Rosanvallon, y los malestares asociados a ellas son consignados en los trabajos de Norbert Lechner y los informes del PNUD que dirigió. Sobre esta cuestión, volveremos más adelante.

capaces de orientar la construcción de sentido frente al orden social actual en importantes sectores de la sociedad. Una preocupación que apunta a las bases actuales de constitución del orden social y político.

Lo que distingue al actual patrón de desigualdades, de aquel que impera durante gran parte del siglo pasado, no es la magnitud de la pobreza. Esta, si bien se coincide en que sobrepasa a su estimación oficial⁷, no supera significativamente sus índices históricos. La pobreza resulta de tradicional existencia, incluso bajo el proyecto desarrollista que, como se sabe, aparte de integrar a importantes franjas medias y obreras, establecía fuertes exclusiones sobre las categorías más pobres de la ciudad y el campo. El rasgo distintivo del panorama actual de la desigualdad social estriba más bien en los extremos e inéditos grados de concentración de la riqueza que refleja. Lo que implica, además del desproporcionado enriquecimiento de los segmentos más altos –y acaso de mayor impacto social y político– que dicha franja se torna más estrecha, y las oportunidades para los segmentos siguientes se reducen en términos de movilidad social. Esto último indica que importantes sectores medios carecen de posibilidades efectivas de ascenso social. El orden actual cobija pues, de un modo determinante, una maquinaria perfecta para producir una extrema concentración de la riqueza.

Por cierto que la condición de la pobreza no es la misma de antaño. De sectores considerados en una suerte de lista de espera para incorporarse a los beneficios del modelo desarrollista (la idea de una “incorporación sucesiva” era expresiva de las expectativas modernizadoras de tal modelo), pasan a partir de la transformación reciente a constituirse en sectores “desciudadanizados” a los que no corresponde otra cosa que paliativos, dada la renuncia a cualquier pretensión de incorporarlos al dinamismo social. Es el rasgo distintivo de los “nuevos pobres”, una franja de población que resulta política, económica y socialmente excedente para los estilos de desarrollo imperantes⁸. Los pobres actuales no resultan políticamente relevantes para el orden actual, y por ello, están fuera de sus preocupaciones centrales, lo que coincide con el hecho que el discurso de la pobreza haya cedido lugar a la inquietud por la desigualdad.

Más allá del dilema de su cuantificación, desde el punto de la acción social y política el problema de la pobreza y la desigualdad social exige dilucidar los mecanismos por los cuales tal situación se produce y reproduce. Lo cual remite a las relaciones de poder imperantes en la sociedad. Son éstas las que se expresan como

⁷ Véase al respecto Ruiz, *op. cit.*

⁸ Véase al respecto Bauman, Zygmunt, *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*, Gedisa Editorial, 3ra. ed., Barcelona, 2003, o también, del mismo autor el libro *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Ed. Paidós, Barcelona, 2005.

una suerte de maquinaria perfecta para producir pobreza, desigualdad, concentración de la riqueza y sus concomitantes limitaciones para la movilidad social. Se trata de relaciones de poder que se constituyen en el curso histórico inmediato. En términos sociales, el sentido histórico regresivo y antipopular de la ofensiva autoritaria⁹ prolonga sus ejes fundamentales bajo el período democrático actual. La transformación social y política significa el freno y la reversión histórica del ascenso del viejo movimiento de masas y sus demandas. De ahí un proceso de desarticulación que acaba reduciendo el peso social y político de los sectores y actores sociales centrales del período nacional-popular, especialmente de la clase obrera y las fracciones medias del empleo estatal. Ello hará imposible una reedición de su vieja alianza social y su gravitación política.

En términos de equidad, el desmantelamiento de los servicios públicos significa un curso de privatización de las condiciones de vida que crea nuevos y amplía viejos mecanismos de diferenciación social, aumentando las formas y el grado de desigualdad presentes en la estructura social. La heterogeneidad que arroja la transformación social, significa un deterioro de las capacidades y las posibilidades de los diferentes grupos sociales subalternos para conformar instituciones asociativas que permitan la agrupación de intereses y la formación de identidades colectivas, lo que limita sus posibilidades de acción colectiva, y con eso su incidencia en el proceso social y político.

Del otro lado, la ofensiva autoritaria no sólo conlleva a una recuperación de cursos de acumulación de capital deteriorados durante el proceso histórico anterior. Significa también una reestructuración de estas condiciones de acumulación, en la que muchas de las viejas fortunas no resultan precisamente privilegiadas. Junto con la recuperación capitalista marcha un reordenamiento del mapa de la riqueza en Chile. A partir del agotamiento de la vieja estructura agraria hacendal y del estancamiento del aparato industrial, el cambio hacia una primacía de las lógicas financieras sobre las productivas no siempre permite la conversión oportuna de las viejas fortunas. Excepciones como los Matte –en gran medida debido a su alianza con El Mercurio y la centralidad de éste en el golpe militar–, resultan exitosas en tal empeño; otras no tanto, como los Cruzat y Vial, que tras un ascenso vertiginoso caen estrepiosamente. Lo demás son nuevas fortunas.

Es un curso de revinculación con el capitalismo mundial en que la suerte de los empresarios criollos depende, en el contexto de un capitalismo dependiente, de la posibilidad y la capacidad de forjar acertadas alianzas internacionales. Es también un giro desde las viejas plazas productivas, agrarias o industriales, hacia los servicios y las áreas especulativas, así como hacia el control –en alianza con capitales externos– de los recursos primarios más codiciados por la demanda externa. Paralelo con eso, se trata además, del traspaso de enormes activos estatales a manos privadas, una

⁹ Es la conocida caracterización que realizan autores como Alain Touraine. Véase Touraine, Alain, *América Latina. Política y Sociedad*, Ed. Espasa – Calpe, Madrid, 1989.

subvención estatal a la formación del capital que adopta dimensiones de una “acumulación originaria” para las nuevas modalidades capitalistas: es la cuestionada privatización.

De ahí que el panorama de la desigualdad se distinga hoy por una concentración del ingreso inéditamente extremada, que expresa grados y oportunidades de movilidad social más restringidas para muchos sectores de la sociedad, y como contraparte, una elite más reducida y reproducida bajo sistemas de socialización impermeables, rodeada de una franja plutocrática mucho más delgada. Un panorama que traslada hacia muchas fracciones de los sectores medios significativas insatisfacciones y malestares, en donde la falta de equidad no se reduce a las tradicionales desigualdades “macroeconómicas” y estructurales, sino que adopta una complejidad mayor gracias a la proliferación de las desigualdades “microeconómicas”, “intracategoriales”, culturales.

La discriminación social que produce el actual sistema de educación, reiterada en los resultados de la PSU, empieza a constituir una inquietud extendida. Ya no se trata sólo de la falta de oportunidades y canales de movilidad social que afecta a los sectores de menores ingresos. La discriminación que determina la acción de mecanismos poco meritocráticos, como los lazos de exclusivas redes sociales, limita también el acceso al ingreso de muchos sectores medios. Con la “jibarización” de las fracciones medias desarrollistas bajo la transformación reciente, se extingue la vieja matriz mesocrática de distribución del ingreso “con cintura de gallina”, –al decir de Aníbal Pinto–, y se troca por otra marcadamente concentradora y restrictiva. De la mano de la reconstrucción política de la “fronda aristocrática” que cobijan los términos de transición a la democracia, marcha junto al proceso de neoliberalización otro de neoligarquización.

Pero esto plantea otro problema. Aquellos sectores medios burocrático-estatales, diezmados por la transformación reciente, desempeñaban un papel fundamental en las construcciones ideológicas socialmente imperantes y más difundidas de la cohesión social. Su “jibarización” acarrea el debilitamiento de dicha ideología de la integración, sin que ésta resulte adecuadamente sustituida a partir de los modos de dominio vigentes. Tales franjas sociales eran las principales propulsoras de la ideología desarrollista y sus potencialidades integrativas, dado que la expansión de la intervención estatal en los procesos de desarrollo significaba la ampliación de sus propias condiciones de existencia social. Lo que hoy está cobrando fuerza es ese vacío.

Como ha establecido la teoría social, los grados más acentuados de desigualdad no constituyen un factor directamente determinante sobre la acción social concreta. Las desigualdades tienden a producir movilización social en la medida que se aprecian como ilegítimas a partir de los patrones socialmente imperantes. Y estos últimos todavía hoy remiten a las viejas expectativas de integración y movilidad social. Pero quienes forjan históricamente esos patrones, hoy son sectores abiertamente

debilitados para reiterar su vieja centralidad en la dominación social. Ello abre una frustración de expectativas y un malestar frente a las formas de desigualdad acrecentadas bajo el modelo de crecimiento y distribución vigente, vinculado a la inexistencia de un régimen efectivo de igualdad de oportunidades y de marcadas dificultades para la realización de las expectativas de seguridad y ascenso social. Desaparecen muchos mecanismos antes asociados a la movilidad social –real o potencial– o bien pierden eficacia, como los grados de formación profesional y de calificación laboral, o el control o atenuación del impacto de factores fortuitos y poco meritocráticos en la proyección social de los individuos.

Si el hecho que la desigualdad social se manifieste como conflicto social depende de los patrones culturales bajo los cuales se aprecia, no parecen ser las viejas desigualdades estructurales las que pudiesen desempeñar un papel determinante en la formación de nuevos conflictos sociales, sino más bien, aquellas relacionadas con la frustración de las expectativas de mejoramiento de la condición social y la inoperancia de los viejos mecanismos subjetivamente relacionados con ello. Tal cuestión involucra una crisis de sentido, la pérdida de grados de cohesión social y como tal una crisis cultural, factores críticos que parecen alumbrar mejor la comprensión de una nueva conflictividad social.

Ahora bien, los problemas emanados de la debilidad de los mecanismos de cohesión e integración social no implican necesariamente el desarrollo de conflictos sociales orientados en una perspectiva de transformación. Sabemos que la polaridad social no se transforma mecánicamente en polaridad política. El desarrollo de las luchas sociales en la actualidad aparece afectado por los altos grados de heterogeneidad que alcanza la estructura social, lo que dificulta la emergencia de franjas sociales con alguna capacidad de representación de intereses más generales. De ahí la proliferación de tensiones sociales marcadas por intereses particularistas.

LA OPACIDAD SOCIAL COMO EXPRESIÓN DEL CARÁCTER DE LA POLÍTICA

El fenómeno de la opacidad social no se puede atribuir únicamente a los cambios estructurales. Por cierto que inciden, como se ha consignado. Pero la magra visibilidad que envuelve a gran parte de las dinámicas sociales, tiene que ver también con los cambios que experimenta la esfera política. Hoy su rasgo más distintivo, en relación a la fisonomía que adopta durante la mayor parte del siglo pasado, está en el hecho que deja de expresar en forma clara a vastos sectores de la sociedad. Se trata de un cambio del carácter social de la política determinado por su acentuada elitización, que diluye el acceso y los controles de gran parte de la sociedad sobre dicha esfera. Como se ha señalado muchas veces, tal transformación redundará en una autonomización de la esfera política, que coadyuva en forma gravitante a la invisibilidad de las diferentes categorías sociales. Es lo que se ha señalado como una “desociologización de la política”.

Tal orientación de la transformación de la política constituye una resultante de las relaciones sociales de fuerza más determinantes en la historia inmediata. Se trata del carácter antipopular de la ofensiva dictatorial, pero también de la proyección de sus rasgos fundamentales en la etapa democrática actual. Ajena a las demandas sociales surgidas de las regresiones que acarrea la transformación neoliberal, la transición a la democracia se reduce mayormente a los aspectos administrativos de la política. La llamada “deuda social” –alusiva a la pérdida de derechos sociales y económicos por parte de los sectores populares y medios bajo la dictadura– es la gran ausente en tal transición. De ahí, la difusión de una lectura ahistórica, “natural” y “técnica”, de la Constitución de 1980 que rige a la nueva democracia. Una interpretación que no sólo hace abstracción de los términos antidemocráticos de su construcción e imposición, sino también de su carácter social. Los ajustes realizados no alteran su “espíritu” original.

Las propias reformas sociales consideradas en la transición apuntan en tal dirección. En la legitimación del modelo económico y social heredado, los ajustes del nuevo gobierno democrático son decisivos. Las reformas laborales y tributaria, impulsadas bajo el argumento moral de la mentada “deuda social”, definen tempranamente la proyección del carácter antipopular del modelo de crecimiento heredado¹⁰. Apelando a un discurso en el que no existen “ni vencedores ni vencidos”, así como a los equilibrios que exige una suprema “razón de Estado”, se consagran las desigualdades sociales extremadas bajo el régimen militar. Dos objetivos se reiteran como fin en sí mismos ante las demandas sociales: el argumento tecnocrático de la “mantención de los equilibrios macroeconómicos” y la estabilidad de la “transición”. El ideologismo que permea al discurso político hace abstracción del carácter y los efectos sociales diferenciados de las políticas impulsadas. Con ello contribuye de forma gravitante a una opacidad social.

Estas y otras operaciones políticas similares consolidan un estilo propio de la actividad política en la nueva situación. Sin el contrapeso de los actores sociales excluidos del pacto de la transición, la política se elitiza. Debuta desde La Moneda el llamado “partido transversal”, tejiendo un importante poder político y social. El alto grado de presidencialismo que establece la Constitución de 1980, antes criticado, es

¹⁰ Se establece un incremento del Impuesto a la Renta del 10 al 15% (muy debajo de los estándares internacionales, que en países industrializados superan holgadamente el 30%) y del IVA del 14 al 16%, trasladando el grueso del alza impositiva a la mayor parte de la población, legitimando además la estructura distributiva. Por otra parte, las nuevas leyes laborales proyectan y perfeccionan las viejas disposiciones del Plan Laboral heredado: un sindicalismo reducido al ámbito de la empresa, condiciones laborales flexibles y la desaparición de los viejos derechos laborales, amplios márgenes de manejo empresarial frente a la fuerza de trabajo, prescindencia estatal en materia de regulación de las relaciones laborales, entre otros aspectos. El empresariado consideró a ambas reformas como parte de un solo paquete: la proyección del modelo económico y social heredado, ahora refrendado por las modalidades del nuevo sistema político.

aprovechado por las nuevas autoridades. Ello hará eclipsar al Congreso y los partidos políticos en el desarrollo de las relaciones y acuerdos con los restantes actores de la trama del poder. Si bien el Estado ha disminuido producto de la transformación neoliberal, el gobierno es fuerte en el sentido aquí considerado, los actores sociales –con excepción del gran empresariado– son débiles y marginales y los poderes fácticos aparecen como omnipotentes. Así, el nuevo escenario del poder rebasa con creces al ámbito de la política formalmente instituida. La marcada ausencia de actores sociales gravitantes, con la excepción ya hecha, otorga gran centralidad a una “política de los acuerdos” de escasa transparencia y reducidos espacios de actividad, lo que hace que incluso los partidos políticos aparezcan relegados a un segundo plano en la toma de decisiones y sufran un creciente desprestigio.

Los partidos pierden su carácter representativo de intereses sectoriales, deviniendo en partidos “nacionales” bajo una orientación más integrativa que conflictiva, abocada a contribuir a la legitimación del poder. De ahí que la tendencia a los acuerdos entre fuerzas políticas que antes resultaban enfrentadas en virtud de las representaciones sociales que asumían. Una integración y autonomía creciente del sistema partidario que no encuentra una contrapartida en niveles de organización social capaces de presionar por sus demandas. Los sectores más organizados pierden incidencia en el proceso político, como las organizaciones sindicales, pero también aquellas capas medias antes lideradas por el sindicalismo de empleados públicos y las agrupaciones de profesionales liberales. Sólo el empresariado gana fuerza como grupo de presión.

En cambio, crece la importancia de la tecnoburocracia y los medios de comunicación de masas en la nueva escena política. El consenso dominante sobre el modelo económico permite sustraer la definición de políticas económicas del debate político, lo que otorga a estas tecnoburocracias un lugar privilegiado en la adopción de tales decisiones. Y la incidencia de los medios de comunicación en la formación de opiniones aumenta en la medida en que se debilitan las viejas identidades sociales y políticas. Esto y la extrema concentración de la propiedad de los medios de comunicación acrecenta su importancia en la creación de opinión pública, y permite que no se reduzcan meramente a expresarla.

La participación electoral deviene en la expresión central de la democracia, reduciendo el ideario democrático a la realización de votaciones. El énfasis puesto en convertir al sistema de partidos y el ejercicio electoral en un mecanismo de legitimación debilita su función de representación social. Así, el fortalecimiento del sistema político se concibe a través de su autonomización de lo social, con lo cual los partidos políticos se debilitan al desvanecerse su vieja función de promoción de la agrupación de intereses sociales. Todo ello debilita los mecanismos representativos de la política, reduciéndola a la administración de los consensos ya construidos. No es casual que en tal situación la política –y la economía– deje de entenderse como un proceso social. Tal naturalización de las decisiones políticas produce en forma importante la anotada opacidad social.

La situación general del poder en la sociedad se expresa así en forma distorsionada en el sistema político formal. El llamado “circuito extrainstitucional del poder”, integrado por el gran empresariado, los conglomerados de los medios de comunicación masiva, la iglesia y las fuerzas armadas, alcanza una enorme determinación sobre las políticas económicas, la dirección cultural de la sociedad, las relaciones internacionales, así como sobre la regulación de importantes espacios de base de la sociedad. Tal elitización representa una rígida brecha entre lo social y lo político. La política se convierte en un asunto de élites que relativiza la incidencia de las instituciones formales, como el parlamento y el sistema de partidos.

Importantes funciones estatales se sustraen de la política abierta, muchas de las cuales se presentan ideológicamente como “técnicas” y “apolíticas”, una suerte de “gestión de entendidos”. El Estado, más allá de conservar el monopolio de la fuerza como último recurso de dominio, se abstiene de regular muchos ámbitos de relaciones sociales, como ocurre en el caso de las relaciones laborales. Tal régimen de prescindencia estatal en la regulación de los conflictos sociales, responde a la decisión de no volver a las viejas formas del Estado de Compromiso, que subyace en el pacto de la transición. La modalidad vigente de dominación no apuesta a un Estado que impulse y maneje un pacto social, sino a uno que mantenga la atomización y la marginación heredadas. Los basamentos de la actual gobernabilidad democrática se sitúan así en la mantención de la desarticulación social heredada del período dictatorial.

Producto de esto se produce una disparidad entre la institucionalidad democrática y la política formal, de un lado, y las formas de regulación de las relaciones sociales a nivel de la base de la sociedad, de otro. En las fábricas y las faenas impera el sometimiento mudo a las desiguales relaciones de poder existentes entre trabajadores y empresarios. Al cerrarse el acceso popular a los procesos de construcción del Estado y desarticularse las viejas formas de relación entre los partidos y algunos sectores populares (laborales sobre todo), se despolitizan las relaciones sociales que anidan en la base de la sociedad. Los sectores populares y vastos sectores medios son excluidos de la política, lo que limita su capacidad de proyección hacia el Estado. La transformación política expulsa del espacio público a los sindicatos, núcleos de partido y “organizaciones” nacionales de masas, abriendo espacio para una recuperación de la vieja tradición carismática de las élites, así como la dependencia clientelística y peticionista de “la masa”.

Restringida así la política a dilemas de gestión a partir de la naturalización de las definiciones adoptadas, y reducida la lógica representativa a la apelación a un ciudadano con abstracción de su condición social, se desdibuja en definitiva el carácter social de la dirección del proceso histórico. Hoy los grados de determinación del gran empresariado sobre la política contrastan fuertemente con el carácter que ésta detenta a lo largo de gran parte del siglo pasado, especialmente desde los años cincuenta en adelante, a partir de la irrupción de las masas populares en la política institucional. Lo que tenemos hoy como política es el producto de la reversión de ese largo proceso histórico.

El empresariado aparece como un actor social con un alto grado de desarrollo, acaso el más alto de una historia de dependencia de la política estatal. El ocaso de los liderazgos más ligados al pinochetismo es muestra de ello. Figuras emblemáticas de esa vieja adscripción, como Ayala, Briones y Heiremans, son desplazadas en las disputas internas por el control de la Sofofa, la CPC y otros gremios empresariales, por el ascenso de un liderazgo pragmático abierto al acuerdo con la elite concertacionista. Lo que no altera su férrea defensa del modelo de económico heredado. Al contrario, ilustra su capacidad de adaptación al nuevo escenario histórico abierto con la transición a la democracia.

E PUR SE MUOVE

Por mucho que resulten menos inteligibles, las dinámicas sociales –entendidas en este sentido como fenómenos relativos a la agrupación de intereses, constitución de identidades, desarrollo de formas de presión y conflictos– no sólo siguen existiendo, sino que expresan además tendencias y procesos que es necesario consignar.

Bajo la etapa democrática el mundo popular exhibe grados de desararticulación aun más acentuados que los registrados anteriormente. Una situación que contrasta con los desarrollos organizativos de la primera mitad de los años ochenta, que ya muestra una tendencia decreciente en la segunda mitad de esa década. Pese a ello se producen algunas experiencias de rearticulación, ya sea intentando nuevas formas o buscando recuperar rumbos pasados, en las cuales suelen primar los rasgos e intereses locales, con la notoria excepción de la experiencia de 1997. En este año coinciden, aunque no de forma articulada, las movilizaciones universitarias, de los profesores, los mapuches y los trabajadores portuarios, a las que se suma el conflicto por el cierre de las minas de carbón en Lota. Sin embargo esta, la situación de mayor movilización popular bajo democracia, es enfrentada con efectividad por la estrategia de gobernabilidad vigente.

Pero es el fenómeno de las dinámicas locales el que resulta más característico de la etapa actual. La experiencia de 1997 es excepcional, y acaso expresiva del peso aun gravitante de tradiciones que provienen de la etapa anterior. Entre dichas dinámicas locales, una de las más visibles es aquella de las tomas de terreno. De larga presencia en la segunda mitad del siglo XX, las tomas de terrenos se reiteran aisladamente en la etapa democrática y en su gran mayoría resultan frustradas.

La primera experiencia de cierta significación es el campamento Esperanza Andina, en la comuna capitalina de Peñalolén. Con dirigentes con experiencia en la toma Nueva La Habana del período de la Unidad Popular, alcanza efectivos grados de organización, de movilización y presión hacia los partidos políticos, llegando a gestar una masiva marcha hasta el Congreso. Mostrando algo que se reitera en experiencias venideras, aparece ya a inicios de los años noventa la fuerte reticencia al intento de representación política, tanto de partidos con expresión parlamentaria como de

aquellos que carecen de ésta. Pero luego de siete años se imponen fórmulas gubernamentales que la desarticulan.

De menores proporciones, otras experiencias similares, marcadas por la carencia de desarrollos organizativos, caen rápidamente en la descomposición y la frustración, que remata a menudo con violentos desalojos. Pero la experiencia más populosa será la ocupación de los terrenos del polémico empresario Miguel Nassur en la misma comuna de Peñalolén. Originada en la organización de decenas de “comités de allegados” en los que gravita la acción de un movimiento político de izquierda, su nivel de organización alcanza un extendido impacto y reconocimiento. Masificada rápidamente a niveles inéditos –alrededor de 10 mil personas agrupadas en unas 1850 familias– producto de un aluvión de pobladores sin casa que invaden los predios ocupados, una gran heterogeneidad en los grados de organización, la capacidad de acción, credos políticos y niveles de delincuencia, rebasa todo diseño inicial. Las especulaciones del propietario en busca de la adquisición estatal del terreno ayudan a prolongar esta experiencia popular. La enorme toma de Peñalolén nace así fragmentada. La división interna resiste los empeños de unificación, viabilizando diversas formas de clientelización tanto de derecha como del gobierno. Pero es acaso la descomposición social que acarrea la proliferación abrupta del “microtráfico” de drogas, instalando una sensación de inseguridad y desconfianza, estimulando el individualismo y la formación de visibles diferencias sociales, lo que determina su desarticulación.

En estas experiencias desempeña un papel fundamental la aspiración a construir comunidad. Exacerbada por los niveles de desintegración que acarrea la transformación reciente, adquiere dimensiones incluso mayores a las distinguidas en los años ochenta¹¹. De ahí que en muchas ocasiones las expectativas de integración social y desarrollo comunitario graviten tanto como las propias demandas económicas, en este caso, de vivienda. El marcado carácter territorial de las experiencias populares en esta etapa no se reduce a las tomas de terreno, sino que gravita incluso en experiencias iniciadas a partir de la acción sindical.

Cuando se habla de dinámica sindical se piensa inmediatamente en la CUT y las grandes organizaciones. Pero es preciso distinguir entre éstas, mayormente gremiales, y la realidad del sindicalismo de base, a partir de la efectiva distancia que instala entre ambos mundos la legislación laboral vigente. Por cierto que la experiencia más visible en estos años es la del sector gremial. Es éste quien logra la mayor incidencia bajo el actual régimen político. No es casual que sea el sector que detenta mayores grados de organización y una presencia dominante en la CUT, al punto de ser su principal sostén. Reducido principalmente al empleo público, se trata de un sector que se desenvuelve en condiciones laborales de excepción –regido por el Estatuto

¹¹ Véase al respecto Baño, Rodrigo, *Lo social y lo político, un dilema clave del movimiento popular*, Flacso, Santiago, 1985.

Administrativo, a diferencia del Código Laboral que rige para la inmensa mayoría de los trabajadores-, lo que facilita su organización pero hace poco generalizables sus demandas, por la cual sus luchas resultan marcadamente corporativas y carentes de impacto en otros sectores sociales. A diferencia de otras experiencias populares, en este caso, la vinculación con los partidos políticos resulta clara y decisoria, abarcando desde las expresiones extraparlamentarias hasta la derecha, arco en el que destaca la adhesión que concita el Partido Socialista.

Los trabajadores del sector público se organizan en 14 gremios que ostentan un nivel de afiliación que supera el 75% del universo potencial de 350 000 trabajadores (no se incluye a las FF.AA., médicos y trabajadores del Poder judicial). Destacan allí el Colegio de Profesores con alrededor de 90 000 afiliados; la Anef con 45 000; y la Confenats y la Afemuch, ambas sobre los 25 000 afiliados cada una. Organizados en torno a la Mesa Nacional del Sector Público, negocian anualmente en forma regular.

Muy distinta es la experiencia del “sindicalismo de base”. Ligado principalmente a la empresa privada, por lo general de medianas dimensiones (sindicatos de alrededor de cien trabajadores), las tratativas de los gremios con autoridades políticas les resultan completamente ajenas. En el “régimen de fábrica” impera sin contrapeso efectivo una casta tecnocrática dependiente de los propietarios, al amparo de desiguales condiciones de organización y negociación, así como de los abusivos grados de desregulación que prescribe el Código Laboral heredado y refrendado por las autoridades democráticas. Algunas experiencias concretas ilustran las tendencias que tienen lugar en este ámbito.

La experiencia capitalina de Cerrillos-Maipú en la segunda mitad de los años noventa, es desarrollada por algo más de una decena de este tipo de sindicatos. Expresiva del sindicalismo reducido a los límites de la empresa, busca superar su atomización a través de la coordinación territorial y laboral. Inicialmente centrada en los dilemas de la demanda salarial, pronto enarbola iniciativas de carácter territorial y comunal, que la proyectan como un actor reconocido por las autoridades respectivas, pasando a ocuparse de diversos aspectos de la vida comunitaria (llega a proyectar la edificación de una población obrera). Preocupada de mantener distancia de las organizaciones sindicales tradicionales de mayores dimensiones, como las Federaciones, Confederaciones y la propia CUT, recela también de la injerencia de los partidos políticos, vinculándose más bien con jóvenes profesionales de movimientos políticos surgidos en los años noventa en la izquierda extraparlamentaria. Aunque surgen otros intentos de este tipo, la de Cerrillos-Maipú resulta una de las experiencias más logradas, desarrollando la formación de dirigentes, apoyos y coordinación en las negociaciones respectivas, actividades sociales en el territorio y la edición de un periódico propio. A la inversa del rumbo de integración sindical tradicional, opta por una extensión territorial abocada a integrar a las familias de los trabajadores, y más tarde intenta incidir en las decisiones municipales. Pero será la presión empresarial (y sus efectivas cooptaciones), el silencio gubernamental y –como

en muchas otras experiencias– la incapacidad de superar los límites basistas y apolíticos, lo que limitará su desarrollo y terminará desarticulándola.

Por esos mismos años, en Valdivia surge una experiencia en muchos aspectos similar a la anterior. Un desarrollo sindical de carácter territorial que logra la fundación de un cabildo popular, con la participación de diversas organizaciones sociales de la provincia. Con un inicio en las inquietudes y convocatorias emanadas de un pequeño sindicato local que despliega activas y bulladas movilizaciones, se pasa de las demandas salariales a los problemas comunitarios. Las frecuentes marchas por la ciudad del sindicato de Infodema concitan la simpatía de diversos sectores. La articulación de una coordinadora sindical con los trabajadores de los astilleros alcanza a diversos grupos poblacionales, al movimiento universitario y los trabajadores de los servicios públicos. Sin embargo, la incapacidad para enfrentar los dilemas de la constitución y proyección política terminan desintegrando a este movimiento provincial.

Acaso más vistoso, el movimiento estudiantil constituye otra de las experiencias a considerar en estos años. En apariencia distinto –y por cierto lo es en muchos aspectos– revela algunas coincidencias con lo anterior al hurgar más allá de la demanda corporativa (créditos de estudio, reducción de aranceles). Así considerado, representa en medida importante una “demanda” juvenil de identidad y socialización, originada también a partir del denominado problema de la “comunidad perdida” que acarrea la orientación desintegradora de la transformación social reciente.

En la segunda mitad de los años noventa el movimiento estudiantil alcanza su mayor grado de movilización. Reconstruido luego de la desintegración del activo movimiento estudiantil antidictatorial, reaparece reducido a demandas económicas específicas. Inspiradas por la generación del ochenta, sus conducciones se agotan al no dar cuenta de las mutaciones ocurridas en el escenario juvenil. Los estudiantes universitarios que seguirán ese impulso con el nuevo siglo, provienen de una proliferación de pequeños colectivos que rechazan a las alternativas políticas tradicionales, integran demandas de participación y democratización de la vida universitaria, tras un difuso discurso que señala la crisis de la universidad pública. Más ligado a movimientos políticos de la izquierda extraparlamentaria, tampoco supera las limitaciones particularistas, pero empieza a expresar fenómenos relativos a una crisis identitaria. Tal como ocurre también con la irrupción estacionaria de los estudiantes secundarios.

Otro caso relativamente notorio es el de las movilizaciones indígenas. Activadas en torno a sus centenarias demandas de tierra y soberanía, resurgen a fines de la década pasada en distintas regiones en forma poco articulada. Su visibilidad crece al inicio con acciones violentas protagonizadas por grupos radicalizados (erróneamente atribuidos a grupos armados de izquierda). Pero la drasticidad del conflicto sólo atiza diferencias internas, entorpeciendo la masificación de las movilizaciones. Presionados por los empresarios, los gobiernos de la Concertación aplican una efectiva estrategia de control: el fuerte aumento de los fondos para las comunidades y familias

que se disponen a negociar aisla a la protesta violenta, al tiempo que el trabajo de inteligencia desactiva a los grupos más radicalizados. Como en otros casos, las posibilidades de articulación de estas movilizaciones con expresiones políticas reconocidas resultan nulas.

LAS DINÁMICAS SOCIALES EN 2005

Durante el 2005 se pueden consignar algunas dinámicas relativamente relevantes. Algunas de ellas reiteran algo de lo que hemos dicho, como es el caso de los gremios públicos y las movilizaciones estudiantiles. Otras, como el conflicto ambiental, abren un espacio relativamente novedoso.

Las más tradicionales dinámicas del sector público desarrollaron una negociación nacional tranquila en 2005, resultando satisfactorios los términos del acuerdo de la Mesa Nacional del Sector Público para las partes involucradas. Ello se atribuye a la existencia de un superávit fiscal alto, así como a las precauciones adoptadas por el gobierno en un año electoral. Los conflictos se desplazaron al nivel sectorial. El Colegio de Profesores resulta cruzado por un conflicto en torno al proceso de Evaluación Docente, atizado en realidad por divisiones políticas al interior del gremio. El sector que lidera Manuel Gajardo, ligado al Partido Comunista, protagoniza más una medición interna de fuerzas con el sector encabezado por Jorge Pavéz y otros ex-comunistas, que un conflicto con el gobierno. Por otro lado, las trabajadoras de la educación parvularia agrupadas en la Ajunji, que atienden los jardines infantiles estatales gratuitos para los sectores más pobres, desarrollan un activo paro nacional de 24 horas con alta adhesión, que resulta eclipsado mediáticamente por el desastre de Antuco.

Otro es el caso de las movilizaciones universitarias. En los últimos años, el problema general de la universidad viene concitando una creciente atención pública. Bajo diversas formas, involucra ya no sólo a los estudiantes sino que a sectores de la comunidad universitaria y a sus propias autoridades. Ello determina un contexto distinto a la cíclica movilización estudiantil. Aparte de los conflictos arancelarios y por los créditos para los estudiantes, las movilizaciones estudiantiles del pasado año se constituyen en torno a un frustrado intento por obtener el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Superior. Ello permitió el apoyo de sectores del profesorado e incluso de algunas autoridades universitarias a la movilización estudiantil, al punto que el Consejo de Rectores expresa públicamente algunas coincidencias, formalizando así un malestar más general de la comunidad universitaria. Las movilizaciones vuelven a ocupar las calles de Santiago y de capitales regionales, y repiten su marcha el día del informe anual del Presidente ante el Congreso. Consiguen abrir un diálogo con el gobierno que termina en un acuerdo con la Confech, liderada por las JJCC y la SurDA, que aumenta los recursos del Fondo de Crédito Solidario y flexibiliza algunos criterios de evaluación socioeconómica para la asignación de

créditos de estudio. Las elecciones estudiantiles no traen grandes cambios en la configuración del Confech. Se mantiene la presencia mayoritaria de la izquierda extraparlamentaria, expresada principalmente en las JJCC y el Movimiento SurDA, con la excepción de una FEUC, recuperada por la derecha.

Aunque no resultan enteramente nuevos, este año adquieren más notoriedad conflictos sociales distintos a los que se habían reiterado hasta ahora. Uno de ellos es el caso de los choques por los problemas ambientales, en cuya inédita visibilidad se mezclan diversos factores. Por un lado los grupos ecologistas más activos han estrechado vínculos sociales y políticos en el último tiempo con otras experiencias sociales como las antes anotadas, ampliando su capacidad de presión. Por otro, estos conflictos asumen una mayor radicalidad, no tanto debido a un fundamentalismo ecológico a menudo reñido con las urgencias de la creación de nuevas plazas de trabajo –lo que más bien le restaría fuerzas– como a una confrontación más frontal con grupos económicos que controlan varios de los más dinámicos rubros primario–exportadores, constituyendo una amenaza para la imagen de las exportaciones chilenas, al denunciar incumplimientos con regulaciones ambientales contenidas en acuerdos comerciales suscritos por Chile. Claro, hechos de cierta espectacularidad harán el resto del trabajo mediático, como la conmovedora imagen de unos cisnes de cuello negro sufriendo el desalojo de sus moradas habituales a consecuencia de la brutalidad ambiental empresarial.

En torno a aventuras empresariales como Celco y otras plantas de celulosa, Pascua Lama, minera Los Pelambres o ciertas salmoneras en el sur, se gestan protestas radicadas en regiones. Pero, a diferencia de experiencias anteriores, esta vez concitan una clara preocupación en esferas privadas y gubernamentales, ante posibles daños a la imagen de los procesos de explotación de los recursos naturales en los principales mercados de los *commodities* chilenos.

Tal es el caso Celco, la planta de celulosa de propiedad del grupo Angelini, en Valdivia. En un curso inédito, la acción ambientalista consigue destapar irregularidades como la falsificación de informes técnicos y presiones sobre los tribunales de justicia. También inéditas son las críticas abiertas que expresa el grupo Matte –otro actor del rubro–, ante la torpeza con que Angelini intenta en un inicio desconocer la protesta ambiental y soslayar sus efectos. Inédita también, es la decisión empresarial del cierre voluntario de la planta impugnada, así como la aplicación de multas a la misma. Pero los ecos del conflicto no terminan ahí. A partir de este conflicto, importantes grupos exportadores se allanan a integrar en sus estamentos gerenciales a técnicos ambientalistas. Es más, el programa del casi seguro próximo gobierno asume diversos compromisos ambientales demandados por estos grupos, ligados al mundo político extraparlamentario, coincidiendo así con la inquietud de los sectores más realistas del empresariado.

Tal apertura empresarial y gubernamental produce distintas interpretaciones entre los ambientalistas, lo que acarrea escisiones. Si para unos los compromisos alcanzados

representan una conquista inédita, para otros tales acuerdos constituyen una pérdida de autonomía, cuando no directamente un intento de cooptación. Eso divide del lado más próximo a tales acuerdos a la Fundación Terram y el programa Chile Sustentable, y del otro a Oceana, Olca y Eco-Océanos, entre otros. De cualquier modo, y más allá de este tipo de dilemas comunes a esta clase de procesos, la posibilidad abierta de constitución de una suerte de Ministerio Ambiental, no sólo parece una plaza de trabajo importante para algunos de estos grupos, sino también una especie de “Ministerio de Certificación” para las exportaciones criollas. Pues la cuestión ecológica no aparece referida tanto a los efectos sobre la vida cotidiana, como a dilemas centrales de un modelo de crecimiento que descansa en la exportación de recursos naturales. No obstante, estas divisiones del mundo ambientalista no pueden interpretarse simplemente en términos ideológicos. Pesan ahí distintas apreciaciones sobre la coyuntura política y sus oportunidades, y por cierto –salvo excepciones– competencias al interior del mismo sector.

Otra experiencia que supera su reducida escala habitual hasta figurar como novedad, es la oposición gestada a través de internet a la política oficial “Mi Primer PC”. Un tipo de experiencias sobre la que se escribe mucho en todas partes, postulada como una suerte de forma de organización social futura que ya estaría aquí. Ante el anuncio de un nuevo plan gubernamental de incorporación y masificación de nuevas tecnologías, surge la denuncia que lo sitúa como un negocio de las grandes empresas de computación. El mayor rechazo lo concita el tipo de PC a comercializar, considerado obsoleto y artificialmente caro debido al pago de licencias por el uso del sistema operativo Windows. Se alega que existen alternativas gratuitas para esto último, como Linux, y comienza la articulación de diversos grupos a través de la red que creen que ello no reduce la llamada “brecha digital” (desigualdades en el acceso y uso de tales tecnologías), sino que, al contrario, la consagra tanto a nivel de individuos como de empresas. Finalmente, replican con una iniciativa alternativa que llaman “Nuestro PC”, que rechaza el negocio de las licencias y defiende el uso del “software libre”, y realizan una protesta “física” ante el palacio de gobierno, logrando cierto impacto mediático. Aunque no trasciende, esta experiencia será presentada como el debut de estas formas de organización y acción social en Chile.

De mayor desarrollo resultan otras dinámicas a menudo ignoradas por los medios de comunicación masiva. Se trata de experiencias populares locales como el desarrollo de radios populares (en varias comunas capitalinas y en algunas regiones), así como el desarrollo de preuniversitarios y otras iniciativas de educación popular que alcanzan cierta estabilidad. Es también el caso de otros conflictos sociales como los que desarrollan este año los deudores habitacionales y los pescadores artesanales.

En el primero de estos casos se trata de distintas formas de acción, de escasa masividad aunque en ocasiones de algún impacto mediático, encaminadas a enfrentar los criterios establecidos en las fichas de Caracterización Socioeconómica (CAS) para medir los índices de pobreza, determinantes en la asignación pensiones

asistenciales y otros beneficios sociales como el subsidio habitacional o el otorgamiento de facilidades y apoyos a los deudores habitacionales. Se demanda al Estado el establecimiento de un criterio de pago de dividendos de acuerdo a las capacidades de cada familia, por parte de organizaciones como la Coordinadora de Deudores Habitacionales y la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales, que durante el año organizaron protestas. Sin embargo, no consiguen una reformulación de los criterios establecidos.

Como el anterior, el conflicto de los pescadores artesanales es antiguo. En este caso, se vincula a la concentración económica que limita las posibilidades de explotación artesanal de los recursos marinos, producto del aumento de las concesiones otorgadas a grandes empresas pesqueras. Desde la aprobación en 2002 de la Ley Corta de Pesca, se ha acelerado la desaparición de pequeñas y medianas pesquerías, generando protestas que han sido enfrentadas a través del ofrecimiento de beneficios sociales a cambio de abandonar la actividad. Las protestas de los pescadores suelen ser violentas, aunque resultan muy sensibles a los ofrecimientos mencionados, dada la latente amenaza de cesantía que enfrentan sus protagonistas.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA ACCIÓN SOCIAL

Como hemos visto, la desarticulación de las viejas condiciones de constitución de la acción colectiva y de los sistemas de relaciones sociales que caracterizaron a las instituciones ubicadas en la base de la sociedad (como la fábrica, la comuna, las estructuras educativas y de la salud), dificulta la continuidad o la reanimación de la mayor parte de las formas de organización y de incidencia que tuvieron durante casi medio siglo los sectores subalternos. Gran parte de la sociedad carece de condiciones de organización que permitan la constitución de instituciones asociativas, y con ello la agrupación de intereses y la formación de identidades colectivas. Esta situación determina una baja posibilidad de formación de formas de acción colectiva y, como tal, de incidencia en el proceso social y político.

Por otra parte, el panorama actual de la sociedad chilena refleja una saturación de órdenes estatales y fácticos, ante lo cual no parece ser el quietismo lo que caracterice por mucho tiempo la forma del ser social y las futuras dinámicas culturales. La concentración del poder y la riqueza vienen favoreciendo la emergencia de conflictos y prácticas de resistencia, aunque fragmentadas y de dimensiones marcadamente locales. El carácter heterogenizante de la transformación social reciente, el sello antipopular de la transición a la democracia, así como la sequía del pensamiento crítico han contribuido a dilatar este orden de cosas.

Si se considera que, lejos de resultar transitorias, muchas de las transformaciones operadas llegaron para quedarse, las interrogantes apuntan a los términos de reformulación de la acción y el conflicto social más que a una reconstitución de sus viejas expresiones. Sobre este dilema de la reconstrucción o la formación de nuevos

actores sociales, poco se discute con algún fundamento basado en una interpretación de las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales ocurridas.

En este sentido, es necesario tener en cuenta las consecuencias que arroja el proceso de terciarización y expansión del sector de los servicios, y la medida en que constituye un sector de la sociedad relativamente nuevo en muchos aspectos, al tiempo que carente de expresión social y política. En no pocos casos se mezclan en su interior franjas medias de restringidas posibilidades de ascenso social, excluidas de las esferas más dinámicas del modelo de crecimiento vigente. Mucho de lo que se ha interpretado a menudo como nuevas formas de malestar social parece estar relacionado con este sector de la sociedad, especialmente con sus fracciones más calificadas.

No sólo se trata de las “nuevas desigualdades” atendidas en la literatura europea. La preocupación por este malestar también concita atención por estos lares. Ya en la década pasada Norbert Lechner desarrolla con cierta insistencia una preocupación por algunos de estos malestares al aludir a las “paradojas de la modernización”¹². Entonces se apuntaba a la tensión entre modernización y subjetividad producto de la orientación de las transformaciones acaecidas en la sociedad chilena. Aunque esto no constituye una novedad en la discusión sociológica, en Chile tendrá un efecto político importante, e intelectualmente consigue reabrir ciertos espacios en las ciencias sociales que recuperan su viejo espíritu crítico originario.

La continuación del proceso de terciarización de la fuerza de trabajo, la atención que comienza a concitar la burocratización del trabajo asalariado bajo la nueva organización privada, la fuerte y sostenida expansión de una suerte de “burocracia moderna de servicios privados” parecen estar vinculadas a estas preocupaciones. Las discusiones del pensamiento social que desarrollan la noción de “trabajo inmaterial” y se ocupan de su centralidad para las modalidades actuales de valorización del capital, apuntan a lo mismo. De la mano de la idea de la existencia de una relación entre las formas cambiantes de resistencia social y las transformaciones de la producción económica y social, plantean la posibilidad de constitución de una nueva

¹² El Informe de Desarrollo Humano en Chile del PNUD titulado así precisamente y dirigido por Lechner, realiza un diagnóstico de la sociedad chilena en el que se destacan malestares de importantes sectores medios con la modernización neoliberal. Aparecido en 1998, llega en un momento de incertidumbre ante el patrón de crecimiento vigente, y de conatos internos dentro de la alianza oficialista que entonces se conocen como una división entre sectores “autoflagelantes” y “autocomplacientes”. Véase PNUD, *Desarrollo humano en Chile 1998: Las paradojas de la modernización*, Santiago, 1998. Lechner, por cierto, retoma su incursión en el debate sobre el Estado y el mercado de fines de los años ochenta e inicios de los noventa, no tanto en términos económicos como en cuanto a una preocupación por el orden social, insistiendo en que éste no descansa en los mecanismos del mercado ni de un sistema político que opera al margen de la sociedad. Una discusión de estos planteamiento puede encontrarse en esta misma revista en Faletto, Enzo y Ruiz, Carlos, *La modernización puesta en duda*, Revista Análisis del año 1998. Política, Economía y Sociedad, Departamento de Sociología, Universidad de Chile, Santiago, 1999.

cultura política y el desarrollo de nuevas formas de organización y conflicto en las clases subalternas. Sin embargo, pese a lo sugerente de estas formulaciones, suelen extrapolar el grado de avance de transformaciones aun en curso, restándole importancia a los grados de heterogeneidad existentes y, en particular, al hecho que muchas de las viejas categorías sociales no desaparecen del todo, imprimiéndole gran complejidad a los problemas relativos a la generalización de intereses, lo que determina procesos mucho más complejos para la acción política. La coexistencia y la tensión entre distintas fracciones sociales propias del nuevo ordenamiento económico y social con otras, provenientes de un viejo pero no desaparecido orden, no se logra resolver políticamente.

En un contexto distinto, esta situación vuelve a plantear el viejo dilema que Gramsci enunciaba como el “problema del messogiorno”, de la unidad entre el norte moderno e industrial y el sur agrario y tradicional en la Italia de la primera mitad del siglo XX. En un nivel de desarrollo mucho menor y germinal, las dinámicas sociales actuales parecen orientarse a una reiteración de este fenómeno, que en Chile ya se apreciara claramente y en forma más desarrollada durante el período de la Unidad Popular. Tal como ocurrió entre distintas conductas del movimiento popular entonces, confrontadas tras las consignas que llamaban a “consolidar lo avanzado” y a “avanzar sin transar”, hoy el problema parece ser el de demandas, formas de acción, organización y conciencia social, que no se vinculan ni entienden entre sí.

Por otra parte, la experiencia regional no parece indicativa respecto del desarrollo social chileno. Las experiencias actuales de los movimientos sociales más activos en América Latina enfrentan una transformación social, económica e institucional que en Chile ya se ha consolidado y poco pueden asociarse a sujetos que comienzan a asomarse en las condiciones propias de un “neoliberalismo avanzado”. La asimetría actual entre Chile y América Latina remite a las dificultades arrastradas en la construcción de un nuevo orden político, tras el ocaso del régimen nacional-popular. La crisis del Estado de Compromiso, producto de un ascendente proceso de democratización social que desemboca en una crisis de dominación y control social, abrió una etapa en la que sucesivos intentos de ordenamiento no han logrado resolver el problema de la articulación de lo político y lo social en gran parte de América Latina.

Las dictaduras representaron un proceso eminentemente defensivo y de contención en la mayoría de la región, sin las connotaciones refundacionales que exhibe la “excepcionalidad chilena”. De ahí, en gran medida, una a menudo exagerada asincronía entre la experiencia chilena y regional. Hoy en América Latina los movimientos sociales obstaculizan la constitución del orden político y social excluyente. En Chile, en cambio, se afirma un orden político basado en la exclusión y casi ausencia de actores sociales protagónicos, en donde la hondura que alcanza la transformación social y política, que por un buen lapso presenta un panorama marcado por la opacidad social, parece apuntar más bien a la constitución de nuevos actores sociales.